Astrida Benita Carrizosa c. Colombia, Caso CIADI No. ARB/18/5, Laudo, 19 de abril de 2021: el tribunal determinó que carecía de jurisdicción *ratione temporis* con respecto al reclamo de la demandante.

En su [laudo del 19 de abril de 2021](#), el tribunal arbitral compuesto por Gabrielle Kaufmann-Kohler (presidente), Diego P. Fernández Arroyo (árbitro nominado por la demandante) y Christer Söderlund (árbitro nominado por Colombia) desestimó el reclamo de la demandante en este caso relacionado con la inversión indirecta de la familia Carrizosa en Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda (“Granahorrar”), una institución financiera. El reclamo fue iniciado en virtud del Capítulo de Servicios Financieros del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.

La demandante es nacional de Estados Unidos, e indirectamente era dueña del 2.3% de Granahorrar. De 1997 a 2001, Colombia experimentó una severa crisis financiera, lo que llevó al Gobierno a intervenir en el sector financiero a través del Banco Central, la Superintendencia (que supervisaba los niveles de liquidez de las instituciones financieras) y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (“Fogafín”), un fondo de garantía encargada de proteger los ahorros de los ciudadanos depositados en instituciones financieras. Los demandantes reclamaban por las medidas adoptadas en 1998 y años siguientes por Colombia y sus autoridades supervisoras bancarias en el marco del fallido rescate de Granahorrar.

La familia Carrizosa impugnó las medidas adoptadas ante los tribunales de Colombia. En 2007, el Consejo de Estado determinó que Fogafin y la Superintendencia no tenían pruebas suficientes de la insolvencia de Granahorrar y que las medidas administrativas no habían sido debidamente notificadas a la familia Carrizosa, ordenó a las agencias pagar más de 114 millones de dólares en compensación a la familia Carrizosa. Las agencias recurrieron dicha decisión ante la Corte Constitucional, que en 2011 anuló la decisión del Consejo de Estado, sobre la base de errores de fondo, de procedimiento y de hecho en dicha sentencia. La familia Carrizosa solicitó la anulación de dicha decisión y argumentó que la Corte Constitucional se había extralimitado en sus facultades al analizar la decisión del Consejo de Estado. En 2014, la Corte Constitucional emitió una orden en la que desestimó la solicitud de anulación. La demandante presentó un reclamo por expropiación directa.

Las Partes acordaron bifurcar el procedimiento, por lo que el tribunal solo analizó las cuestiones jurisdiccionales. Colombia argumentó que la controversia se encontraba fuera del marco de aplicación temporal del tratado, ya que el instrumento había entrado en vigor recién el 15 de mayo de 2012 y las medidas impugnadas habían ocurrido con anterioridad.

El tribunal explicó que el artículo 10.1.3 del tratado reflejaba la norma de derecho internacional consuetudinario que establece la irretroactividad de los tratados, codificada en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Por ende, solo la decisión de 2014 de la Corte Constitucional se encontraba dentro del ámbito de aplicación temporal del tratado. Sin embargo, Colombia argumentó que el tribunal no tenía jurisdicción para entender en el reclamo por la decisión de 2014, porque dicha decisión estaba vinculada a una controversia que tuvo su origen en una fecha anterior a la fecha de entrada en vigor del tratado, y que, en cualquier caso, esa decisión no constituía una violación del tratado separada e independiente. El tribunal no estuvo de acuerdo con Colombia y no consideró que el alcance temporal de su jurisdicción se

limitara a controversias surgidas después de la entrada en vigor del tratado. Basándose en la definición de “controversia” elaborada por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso *Mavrommatis*, el tribunal explicó que si mientras se desarrolla una controversia un Estado presta su consentimiento para obligarse por un tratado, el cual prohíbe un tipo de conducta que subyace a la controversia existente, los actos posteriores del mismo tipo no están fuera del ámbito de aplicación del tratado simplemente porque tales actos puedan considerarse parte de la disputa preexistente. Para el tribunal, si la decisión de 2014 de la Corte Constitucional pudiera dar lugar a una violación autónoma del tratado, dicha violación no estaría fuera del ámbito de aplicación del tratado. El tribunal estimó que esta conclusión era consistente con el sentido corriente, el contexto, y el objeto y propósito del tratado. Sin embargo, entendió que la decisión de 2014 de la Corte Constitucional no era una medida independiente o autónoma, ya que en esencia el reclamo relativo a dicha decisión se basaba en medidas adoptadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado. La decisión de la Corte Constitucional meramente confirmaba una decisión anterior.

El tribunal también rechazó el argumento de la demandante en virtud del cual Colombia había incurrido en una denegación de justicia. El tribunal determinó que se trataba de un componente del estándar de trato justo y equitativo, respecto del cual no tenía competencia según el tratado (el artículo 12.1.2(b) del capítulo de Servicios Financieros establece que el tribunal solo tiene competencia para entender por reclamos por expropiación, transferencias, denegación de beneficios y formalidades especiales y requisitos de información).

El tribunal también entendió que el capítulo de Servicios Financieros del tratado había incorporado por referencia el período de prescripción de tres años previsto en el capítulo de inversión general. Dado que la decisión de la Corte Constitucional de 2014 había sido emitida más de tres años antes de que se presentara el arbitraje en enero de 2018, el reclamo también se encontraba prescripto.

La demandante también invocó la cláusula de la nación más favorecida prevista en el tratado para beneficiarse del plazo de prescripción más favorable de cinco años previsto en el TBI Colombia-Suiza. El tribunal, sin embargo, explicó que no tenía jurisdicción sobre reclamos en virtud de la cláusula de la nación más favorecida según el capítulo de Servicios Financieros del Tratado y, en cualquier caso, la demandante había tenido conocimiento de los hechos que dieron lugar a la controversia más de cinco años antes de que se iniciara el arbitraje. El tribunal señaló que tanto Colombia (en sus presentaciones) como Estados Unidos (en su presentación de parte no contendiente, que incluyó una presentación de 15 minutos durante la audiencia) coincidían con esta interpretación. El tribunal enfatizó que la Comisión de Derecho Internacional había reconocido que las declaraciones realizadas en el curso de procedimientos legales podían constituir un acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación de un tratado o una práctica ulteriormente seguida en la aplicación de un tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación de dicho instrumento, relevante para la interpretación del tratado de conformidad con el artículo 31.3 incisos (a) y (b) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

En consecuencia, el reclamo de la demandante fue desestimado.